

CONGRESO NACIONAL  
CÁMARA DE SENADORES  
SESIONES ORDINARIAS DE 2016

ORDEN DEL DIA N° 1063

Impreso el día 16 de noviembre de 2016

SUMARIO

COMISIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES

Dictamen en el proyecto de ley, el venido en revisión y otros de varios señores senadores por el que se modifica el Código Penal respecto al agravamiento de las penas por accidentes de tránsito. (CD-20/15; S-4090/15; S-508 - S-3163 - S-4001- S-4102 y S-4274/16). Se aconseja aprobar otro proyecto de ley.

DICTAMEN DE COMISIÓN

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha considerado el proyecto de ley venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, registrado bajo expediente CD-20/15, "Modificando el Código Penal, respecto de agravar las penas por accidentes de tránsito"; el proyecto de ley de la señora senadora (MC) Marta Gabriela Michetti registrado bajo expediente S-4090/15, "Modificando los arts. 84 y 94 del Código Penal, respecto de los agravantes por uso de estupefacientes y exceso de alcohol"; el proyecto de ley del señor senador Ernesto Félix Martínez, registrado bajo expediente S-508/16, "Modificando los arts. 84 y 94 del Código Penal, respecto de los agravantes por uso de estupefacientes y exceso de alcohol"; el proyecto de ley de la señora senadora Sandra Giménez registrado bajo expediente S-3163/16, "Modificando el art. 84 del Código Penal, agravando las penas por muerte en accidente de tránsito"; el proyecto de ley de la señora senadora Nancy González, registrado bajo expediente S-4001/16, "Modificando el Código Penal respecto de tipificar los delitos viales"; el proyecto de ley del señor senador Juan Manuel Irrazábal, registrado bajo expediente S-4102/16, "Modificando diversos arts. del Código Penal de la Nación, acerca de los delitos contra la Seguridad Vial" y el proyecto de ley del señor senador Pedro Guillermo Guastavino registrado bajo expediente S-4274/16, "Modificando los arts. 84 y 94 del Código Penal, elevando las penas por homicidios y lesiones culposas"; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de ley

Artículo 1º: Sustitúyese el artículo 84 del Código Penal, por el siguiente:

“Será reprimido con prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial de cinco a diez años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, o inobservancia de los reglamentos o los deberes a su cargo, causare a otro la muerte.

La pena será de prisión de tres a ocho años cuando fueren más de una las víctimas fatales, o si el hecho hubiese sido ocasionado en razón de una culpa grave caracterizada por un obrar especialmente irreflexivo o temerario.

Sin perjuicio de la disposición general precedente, en los casos de conducción de automotores, se considerarán supuestos de culpa grave quien condujere bajo efectos de estupefacientes, o con un nivel de alcohol en sangre significativamente superior al límite tolerado, o en significativo exceso de la velocidad máxima permitida, o si el conductor se diere a la fuga o no intentare socorrer a la víctima o en las circunstancias previstas en el artículo 193 bis.”

Art. 2º: Sustitúyese el artículo 94 del Código Penal, por el siguiente:

“Será reprimido con prisión de un mes a tres años o multa de mil a quince mil pesos, e inhabilitación especial, en su caso, de uno a cuatro años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, o inobservancia de los reglamentos o los deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud.

Si las lesiones fueran de las descriptas en los artículos 90 o 91, la pena de prisión será de uno a cuatro años, multa de cinco mil a veinte mil pesos e inhabilitación especial por dos a cinco años. En tales casos, si además concurriera alguna de las circunstancias previstas en el segundo o tercer párrafo del artículo 84, la pena será de uno a seis años de prisión e inhabilitación especial por tres a siete años.”

Art. 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2016

Pedro G. A. Guastavino.- Ernesto Félix Martínez.- Marina R. Riofrio.-  
Rodolfo J. Urtubey.- Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.- Sigrid E.  
Kunath.- Silvia B. Elías de Pérez.- Marta Varela.-

En disidencia parcial:

Luis P. Naidenoff.- Juan M. Pais.-

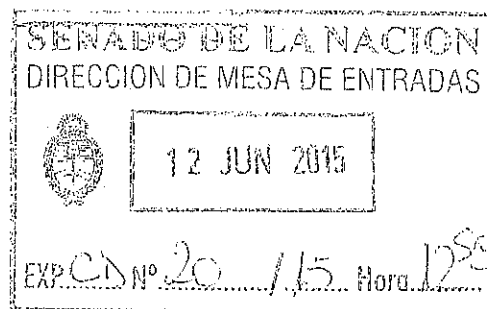
ANTECEDENTE

(I)

*H. Cámara de Diputados de la Nación*

*Presidencia*

75, 398, 534, 885-D-14;  
606, 607, 1238, 1555, 2006, 2124,  
2195, 2236, 2393, 2604 y 2615-D-15  
OD 2012



Buenos Aires, 10 JUN 2015

Señor Presidente del H. Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, comunicándole que esta H. Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al H. Senado.

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º- Modifícase el artículo 84 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 84: Será reprimido con prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo causare a otro la muerte.

El mínimo de la pena se elevará a dos años si fueren más de una las víctimas fatales.

Artículo 2º- Incorpórase como artículo 84 bis al Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 84 bis: Será reprimido con prisión de dos a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por la



*h*



*H. Cámara de Diputados de la Nación*

75, 398, 534, 885-D-14;  
606, 607, 1238, 1555, 2006, 2124,  
2195, 2236, 2393, 2604 y 2615-D-15

OD 2012

2/.

conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte.

La pena será de prisión de tres a seis años, si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diere a la fuga o no intentase socorrer a la víctima siempre y cuando no incurriere en la conducta prevista en el artículo 106, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a quinientos miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o un gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de treinta kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular o cuando se dieran las circunstancias previstas en el artículo 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando fueren más de una las víctimas fatales.

Artículo 3° - Modifícase el artículo 94 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 94: Se impondrá prisión de un mes a tres años o multa de mil a quince mil pesos e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud.

Si las lesiones fueran de las descriptas en los artículos 90 o 91 y fueren más de una las víctimas lesionadas, el mínimo de la pena



4  
g



*H. Cámara de Diputados de la Nación*

75, 398, 534, 885-D-14;  
606, 607, 1238, 1555, 2006, 2124,  
2195, 2236, 2393, 2604 y 2615-D-15  
OD 2012  
3/.

prevista en el primer párrafo, será de seis meses o multa de tres mil pesos e inhabilitación especial por dieciocho meses.

Artículo 4º- Incorpórase como artículo 94 bis del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 94 bis: Será reprimido con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por dos a cuatro años, si las lesiones de los artículos 90 o 91 fueran ocasionadas por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor.

La pena será de dos a cuatro años de prisión si se verificase alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diese a la fuga, o no intentare socorrer a la víctima siempre y cuando no incurriera en la conducta prevista en el artículo 106, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a quinientos miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o un gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de treinta kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular, o cuando se dieran las circunstancias previstas en el artículo 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando fueren más de una las víctimas lesionadas.

Artículo 5º- Modifícase el artículo 193 bis del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:



*Handwritten signature*

*H. Cámara de Diputados de la Nación*

75, 398, 534, 885-D-14;  
606, 607, 1238, 1555, 2006, 2124,  
2195, 2236, 2393, 2604 y 2615-D-15

OD 2012

4/.

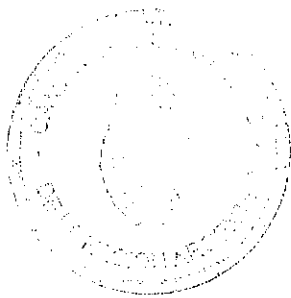


Artículo 193 bis: Será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente.

La misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare la conducta prevista en el presente artículo, y a quien posibilitare su realización por un tercero mediante la entrega de un vehículo con motor de su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo que será utilizado para ese fin.

Artículo 6º- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Dios guarde al señor Presidente.



Three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most legible, appearing to read "García". Below it are two more signatures, one of which is a large, stylized "Z" or "A" shape.

(II)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1: Modifíquese el art 84 del Código Penal que quedará redactado de la siguiente manera:

“Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes de su cargo, causare a otro la muerte. El mínimo de la pena se elevará a dos años si fueren más de una las víctimas fatales, o si el hecho hubiese sido ocasionado por la conducción imprudente, negligente, inexperta, o antirreglamentaria de un vehículo automotor.

En el segundo supuesto del párrafo anterior, se impondrá prisión de cinco a quince años e inhabilitación especial definitiva, a quien cometiere el hecho bajo los efectos de estupefacientes, con un nivel de alcohol en sangre superior al límite tolerado o conduciendo en exceso de velocidad de más de cincuenta kilómetros por encima de la velocidad máxima permitida para el lugar del hecho.”

Art. 2: Modifíquese el art 94 del Código Penal que quedará redactado de la siguiente manera:

“Se impondrá prisión de un mes a tres años o multa de mil a quince mil pesos e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud.

Si las lesiones fueran de las descritas en los artículos 90 o 91 y concurriera alguna de las circunstancias previstas en el segundo párrafo del artículo 84, el mínimo de la pena prevista será de seis meses o multa de tres mil pesos e inhabilitación especial por dieciocho meses. En este caso, cuando concurriera alguna de las circunstancias previstas en el tercer párrafo del artículo 84, la pena prevista será de tres años y seis meses a cinco años e inhabilitación especial por diez años.”

Artículo 3: Comuníquese al Poder Ejecutivo. –

Gabriela Michetti. -

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto tiene su antecedente en el expediente S-0474/14, el cual no fue tratado durante el período de vigencia legislativa por la evidente falta de apertura a la discusión que durante éstos últimos

años imperó en este Senado, por lo que quiero proponerlo nuevamente, a la espera de una dinámica mucho más democrática y abierta al diálogo por parte de los Senadores que ejercerán su rol en el próximo período legislativo.

El Honorable Congreso de la Nación siempre tuvo una gran preocupación por legislar en orden a la responsabilidad penal, atinente a la intervención en casos de siniestros de tránsito vial, cuando se ocasiona la muerte, lesiones graves o lesiones gravísimas de la víctima.

Si la razón última de la sanción penal es que se pena para que no se delinca, la escala represiva del homicidio y las lesiones culposas, pese a la elevación del monto de pena conminado para el art. 84 del Código Penal, según la reforma introducida por la Ley 25189, no parece haber obrado como disuasoria de incurrir en tal conducta típica, atento la divulgación de estadísticas confiables, que dan cuenta de alrededor de 8 mil muertos al año como consecuencia de siniestros viales en la Argentina. Peor aún, la siniestralidad vial representa la primera causa de muerte entre menores de treinta años en nuestro país.

Es que, en la práctica judicial y por apego estricto a la ley, queda demostrado que las condenas efectivas, por homicidios y lesiones culposas conduciendo automotores, pueden reputarse excepcionalísimas.

La verdadera pena de aflicción irreparable es la de las víctimas, bien sea que hayan muerto a raíz del hecho o que tengan que soportar perpetuamente las secuelas físicas y psíquicas del mismo, en muchos casos generadores de incapacidades irreversibles. Asimismo, el núcleo familiar y efectivo de las víctimas sufre de por vida la pérdida sufrida.

La comprensible indignación social ante esta pandemia se agrava cuando es testigo a diario que, en la abstracción legal, se mide con el mismo rasero al conductor que genera daño a la vida o a la salud de otros en el marco de circunstancias desgraciadas y efectivamente accidentales, y al victimario que generó el siniestro por conducir con sus aptitudes alteradas por la ingesta de alcohol o el consumo de sustancias estupefacientes.

Hasta el momento, el único recurso de los magistrados para intentar penar con mayor severidad a quienes incurrieron en conductas como la anteriormente señalada, fue echar mano de la construcción del llamado "dolo eventual", incompatible en la dogmática penal argentina con los tipos culposos.

El efecto de esta manera de encarar los procesos penales por homicidios o lesiones derivadas de hechos de tránsito concluye, por lo general, en prisiones preventivas de cierta extensión, al abrigo de hipótesis de "dolo eventual", y condenas a título de culpa, con la consecuencia de la libertad condicional de los acusados, luego de tramitarse causas cuya inútil extensión en el tiempo -aspecto que hace



al derecho procesal y del cual nos ocuparemos en proyecto separado-, es proverbial.

El presente intento, luego del primer avance configurado por la Ley 25189, pivotea sobre la represión del homicidio culposo y las lesiones culposas, cuando el agente actúa voluntariamente bajo los efectos del alcohol o los estupefacientes o conduce con un exceso gravísimo de velocidad. En estos casos, no es posible hablar de accidente, ya que este término remite a hechos fortuitos, eventuales, fuera de toda previsión y por lo tanto inevitables. Por el contrario, si un conductor consume alcohol o drogas, o supera aberrantemente la velocidad máxima, necesariamente estamos fuera de dicha definición, ya que como sostiene la Organización Mundial de la Salud, si un hecho se puede evitar no es un accidente.

A tal fin se postula una adecuación de las penas e inhabilitaciones, en escalas intermedias, pero que admitimos severas, entre las actuales de las figuras culposas y los tipos de homicidio simple y lesiones graves y gravísimas, sin retorcer ni desmembrar la sistemática del Código Penal, resultando necesario solo el agregado de párrafos en dos artículos, para introducir circunstancias agravantes de las sanciones, elección que más adelante explicaremos.

En conexión con la presente propuesta, hemos tenido a la vista el Proyecto de Ley del Senador Nacional Miguel Ángel Pichetto, S-0609/2008, proponiendo la incorporación de un Capítulo completo al Código Penal, a denominarse "Delitos contra la seguridad vial", reconociendo como antecedente, según lo explica el Sr. Senador Nacional, el Código Penal Español.

Como todo intento de dar respuesta rápida a las demandas sociales, sólo merece el elogio, más a nuestro parecer incursiona en transformar en tipos penales las infracciones previstas en las Leyes y Ordenanzas de tránsito, soslayando la previsión genérica de los tipos culposos, de enorme tradición doctrinaria y elaboración jurisprudencial en la República Argentina, que castiga la inobservancia de los reglamentos, los cuales, en el caso de los Códigos u Ordenanzas de tránsito, según la jurisdicción, quedan como materia nacional, provincial o municipal, atento nuestro régimen federal de gobierno (art. 129 CN).

Precisamente, entendemos que el profundo acervo jurídico, ínsito en el estudio doctrinario y jurisprudencial de los tipos de homicidio y lesiones culposas en el tránsito, desde la sanción del Código Penal Argentino, no puede despreciarse; sólo cuadra, a nuestro modesto criterio, adecuar las agravantes y su sanción, a la realidad del momento actual.

El segundo proyecto revisado por nuestras bancadas se trata del CD-6492/2002, titulado "Control de grado de alcoholemia", que lejos de contraponerse con nuestra propuesta, bien la puede integrar, pasando de una expresión preventiva, a su inclusión en el Código Penal, dentro del tipo culposo, para los cuales ensayamos el agregado de circunstancias agravantes de la sanción.

Frente a lo que aparece para la sociedad como una verdadera e injusta desproporción entre las consecuencias para el responsable de un siniestro de tránsito y quien lo padece en el amplio marco actual del tipo culposos, no se trata con este proyecto de propiciar un derecho penal de vindicta, sino de adecuar las penas a la realidad social, en la idea siempre de legislar para que no se incurra en delito.

Intentamos con el proyecto de ley, una aplicación práctica de la ley penal, ajustada a la realidad y alejada de la discrecionalidad judicial, manteniendo la tradición jurídica argentina, con su división en dolo y culpa, evitando la elección por los jueces entre la culpa y una construcción ficticia como el llamado dolo eventual, opción esta inexistente en el derecho penal argentino (Cfr. Marco Antonio Terragni, Dolo Eventual y Culpa Consciente, Ed. Rubinzal Culzoni, p. 79 y sgts).

La rigurosidad del derecho penal, de estricta base constitucional, exige legislar para evitar intuiciones judiciales o decisiones basadas en sentimientos de justicia. El convencimiento de que la introducción de una calificante objetiva, abarcaría la amplia mayoría de los casos en los cuales la repulsión social frente a conductas culposas de enorme resultado dañoso, terminando con la arbitrariedad de dejar casos iguales sometidos a respuestas jurisdiccionales diferentes, motiva también nuestra presentación.

La escala de sanción que se propugna guarda estricta proporción, con la cabal custodia del bien jurídico protegido, -la vida humana-, y la repudiable conducta de quien conduce vehículos automotores, bajo la ingesta de alcohol o estupefacientes, o violando gravemente los límites de velocidad, derivando la enunciación de estos al listado que hace parte de la Ley 23.737, a fin de lograr coherencia sistemática en los términos de las leyes penales de fondo.

Convencidos de que el debate reglamentario, mejorará y alimentará el presente proyecto, cuyo contenido sólo procura una modernización de la ley penal, eludiendo toda polémica ideológica, solicito a los señores Senadores que acompañen la aprobación del presente proyecto de Ley.

Gabriela Michetti. -

(III)

## PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,...

Artículo 1º - Agréguese al artículo 84 del Código Penal, el siguiente párrafo:

"En el segundo supuesto del párrafo anterior, se impondrá prisión de seis a quince años e inhabilitación especial definitiva, a quien cometiere el hecho bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel

de alcohol en sangre superior al límite máximo establecido por la legislación sobre tránsito aplicable."

Art. 2º - Agréguese al artículo 94 del Código Penal, el siguiente párrafo:

"Cuando concurriere alguna de las circunstancias previstas en el tercer supuesto del segundo párrafo del artículo 84, se impondrá prisión de cuatro a diez años e inhabilitación especial por quince años, a quien cometiere el hecho bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcohol en sangre superior al límite máximo establecido por la legislación sobre tránsito aplicable."

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ernesto F. Martínez.-

## FUNDAMENTOS

Señora presidente:

Argentina es el segundo país con mayor mortalidad por accidentes de tránsito en toda América Latina -27por cada 10.000 habitantes- . Las estadísticas son elocuentes marcando así que la última reforma introducida por la ley 25.189 en sus artículos 84 y 94, entre otros, no parece haber obrado como disuasoria de incurrir en las penas por homicidio y lesiones culposas a los conductores de vehículos automotores.

Debemos pensar que la verdadera pena e irreparable es la de las víctimas, bien sea porque hayan muerto a raíz del hecho o que tengan que vivir perpetuamente las secuelas físicas y psíquicas del mismo, en muchos casos generadores de incapacidades irreversibles.

Asimismo, su núcleo familiar y afectivo que sufre de por vida la pérdida o el dolor de ver a su ser querido cómo su vida se le ha transformado por la irresponsabilidad de un tercero.

La comprensible indignación social ante esta calamidad se agrava cuando es testigo a diario que, en la abstracción legal, se mide con la misma vara al conductor que genera daño a la vida o a la salud de otros en el marco de circunstancias desgraciadas y efectivamente accidentales, y al victimario que generó el siniestro por conducir con sus aptitudes alteradas por la ingesta de alcohol o el consumo de estupefacientes.

Hasta el momento, el único recurso de los Magistrados para intentar penar con mayor severidad a quienes incurrieron en conductas como la última señalada, fue echar mano de la construcción del llamado "dolo eventual", incompatible en la dogmática penal argentina con los tipos culposos. El efecto de esta manera de encarar los procesos penales por homicidios o lesiones derivadas de hechos de tránsito concluye, por lo general, en prisiones preventivas de cierta extensión,

al abrigo de hipótesis de "dolo eventual", y condenas a título de culpa, con la consecuencia de la libertad condicional de los acusados.

En las modificaciones a los artículos 84 y 94 configurados por la ley 25.189 no contempla una sanción adecuada según la definición que sostiene la Organización Mundial de la Salud, y en nuestro país, la Agencia Nacional de Seguridad Vial que no se puede hablar de accidente si se puede evitar, remitiéndonos frente a un conductor alcoholizado o que ha consumido estupefaciente.

A tal fin se postula una adecuación de las penas e inhabilitaciones, en escalas intermedias, pero que admitimos severas, entre las actuales de las figuras culposas y los tipos de homicidio simple y lesiones graves y gravísimas, resultando necesario sólo el agregado de un párrafo en los dos artículos mencionados, para introducir circunstancias agravantes de las sanciones.

La escala de sanción que se formula guarda estricta proporción, con la cabal custodia del bien jurídico protegido, la vida humana, y la repudiable conducta de quien conduce vehículos automotores bajo la ingesta de alcohol o estupefacientes, derivando la enunciación de estos al listado que hace parte de la ley 23.737 (de Estupefacientes), a fin de lograr coherencia sistemática en los términos de las leyes penales de fondo.

Convencido de que el debate reglamentario mejorará y alimentará el presente proyecto, cuyo contenido solo procura una modernización de la ley penal y eludiendo toda polémica ideológica, solicito a mis pares la aprobación del mismo.

Ernesto F. Martínez.-

(IV)

## PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º: Modifíquese el artículo 84 del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Será reprimido con prisión de seis (6) meses a cinco (5) años e inhabilitación especial por cinco (5) a diez (10) años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte.

El mínimo de la pena se elevará a dos (2) años si fueren más de una las víctimas fatales o si el hecho hubiese sido ocasionado por la conducción imprudente, negligente o inexperta de un vehículo automotor.

Cuando la muerte ha sido ocasionada por el manejo de un vehículo automotor cuyo conductor no ha respetado las normas de tránsito generales o reglamentarias locales y, con tal conducta, contribuye a un estado constante de riesgo para la seguridad y orden público, el juez debe decretar la inmediata detención del imputado y establecer por el término de diez (10) días, que no podrá ser excarcelable, las siguientes condiciones disciplinarias: observar las reglas de control que fije la resolución, realizar trabajos comunitarios, someterse a educación vial, formación ética y exámenes psicofísicos para la eventual reinserción social durante el proceso. Si el imputado ha sido encontrado con índice de ingesta de bebidas alcohólicas las condiciones disciplinarias, contra las cuales no procede excarcelación, serán durante treinta (30) días."

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sandra D. Giménez.-

## FUNDAMENTOS

Señora presidente:

El presente proyecto de Ley constituye una iniciativa de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones sancionada el pasado 11 de agosto de 2016 como Comunicación N° 31 2016/17, a través de la cual los legisladores provinciales nos solicitan a los legisladores nacionales que representamos a la provincia de Misiones y a su pueblo en este Honorable Congreso de la Nación que propongamos e impulsemos modificaciones del artículo 84 del Código Penal, agravando las penas por muerte en accidente de tránsito en los términos en los que se propone esta iniciativa.

En cumplimiento de mi deber como representante de la provincia de Misiones en el Senado de la Nación, presento esta iniciativa, esperando que la relevancia de la mortalidad en materia de tránsito y, en virtud de los antecedentes normativos considerados en ambas Cámaras, mis pares me acompañen en el planteo de la necesidad de realizar un abordaje urgente e integral de la problemática de los accidentes de tránsito en la República Argentina.

Sandra D. Giménez.-

(V)

## PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º -Modifíquese el art. 84 del Código Penal que quedará redactado de la siguiente manera:

"Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años, el que por imprudencia,

negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes de su cargo, causare a otro la muerte.

El mínimo de la pena se elevará a tres años si fueren más de una las víctimas fatales, o si el hecho hubiese sido ocasionado por la conducción imprudente, negligente, inexperta, o antirreglamentaria de un vehículo automotor.

En el segundo supuesto del párrafo anterior, el mínimo de la pena de prisión se elevará a cinco años e inhabilitación especial de diez a quince años, si el autor del hecho se encontraba bajo la acción de estupefacientes, bebidas alcohólicas y/o sustancias tóxicas que disminuyen la capacidad para conducir."

Art. 2º - Modifíquese el art. 94 del Código Penal que quedará redactado de la siguiente manera:

"Se impondrá prisión de un mes a tres años o multa de mil a quince mil pesos e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud.

Si las lesiones fueran de las descritas en los artículos 90 o 91 y concurriera alguna de las circunstancias previstas en el segundo párrafo del artículo 84, el mínimo de la pena prevista será de seis meses o multa de tres mil pesos e inhabilitación especial por dieciocho meses.

Si las lesiones fueran de las descritas en los artículos 90 o 91 y concurriera alguna de las circunstancias previstas en el tercer párrafo del artículo 84, el mínimo de la pena de prisión prevista será de dos años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años."

Art. 3º - Incorpórese al Capítulo II del Título VII del Libro II del Código Penal el artículo 193 ter, que quedará redactado de la siguiente manera:

Será reprimido con pena de prisión de un mes a dos años y a la inhabilitación para conducir por tiempo superior a uno y hasta cuatro años, el que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora a la máxima permitida reglamentariamente en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora a la máxima permitida reglamentariamente en vía interurbana.

Art. 4º - Incorpórese al Capítulo II del Título VII del Libro II del Código Penal el artículo 193 quater, que quedará redactado de la siguiente manera:

Será sancionado con la pena de prisión de un mes a dos años y a la inhabilitación para conducir por tiempo superior a uno y hasta cuatro años, el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la acción de estupefacientes, bebidas alcohólicas y/o sustancias tóxicas que disminuyen la capacidad para conducir.

Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Nancy S. González.- Alfredo H. Luenzo. -

FUNDAMENTOS

Señora presidente:

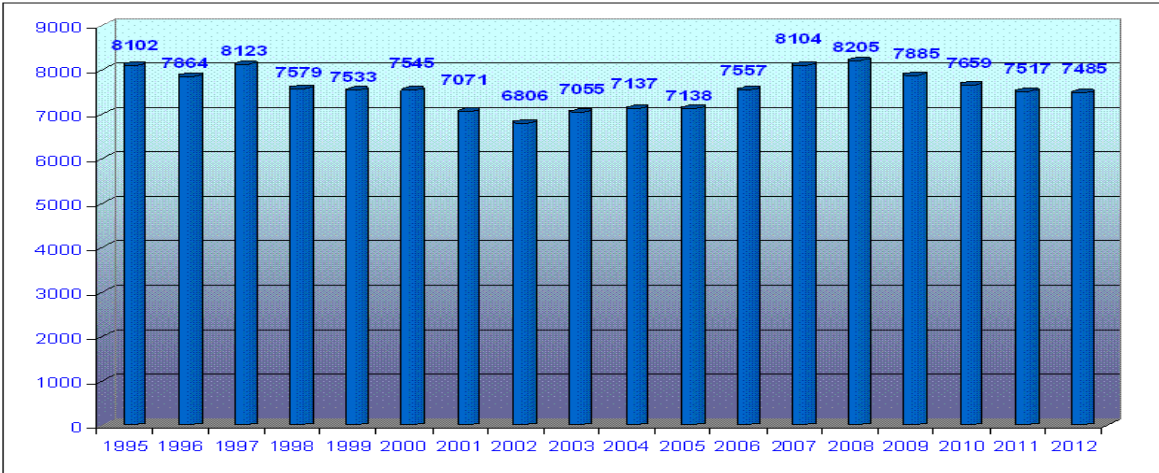
Creo indispensable para iniciar con la enunciación de fundamentos de este proyecto, mencionar una cifra: Ciento cinco mil quinientas cuarenta y tres (105.543).

Este número -que podría ser la cantidad de habitantes de una ciudad mediana como Santa Rosa de la Pampa- corresponde a la cantidad de personas que han muerto en accidentes de tránsito en Argentina desde 1995.Los accidentes viales son la primera causa de muerte entre los menores de 35 años en nuestro país<sup>1</sup>. Alrededor de 7.500 personas mueren por año a causa de siniestros viales en Argentina<sup>2</sup>.

La cifra es alarmante. Podremos dimensionarla adecuadamente si pensamos que 7.500 muertes por año equivalen a tener cada tres días un accidente aéreo como el de LAPA o Fray Bentos, o tres tragedias ferroviarias -como la ocurrida en Once en 2012-, por semana durante un año entero.

Entre las primeras tres causas de accidentes de tránsito<sup>3</sup> encontramos al exceso de velocidad, el consumo de alcohol, la falta de descanso y el no uso del cinturón de seguridad.

En el siguiente cuadro pueden apreciarse las cifras anuales en detalle:



<sup>1</sup> La Asociación Civil Luchemos Por la Vida, que viene trabajando desde 1990 con estos temas elabora anualmente estadísticas recopilando y corrigiendo las cifras oficiales en base a estándares internacionales, ya que en nuestro país existe una gran dispersión de datos sobre el particular. Asimismo las estadísticas de la mencionada ONG incluyen no solamente a las víctimas fatales en el lugar del hecho, sino también a aquellas que fallecieron posteriormente en algún centro asistencial como consecuencia de las heridas sufridas por el siniestro. Esta diferencia metodológica a la hora de elaborar las estadísticas explica la diferencia en la cifras si uno las compara con aquellas publicadas por la Dirección Nacional de Observatorio Vial que pueden consultarse en <http://observatoriovial.seguridadvial.gov.ar/cuadros-estadisticos.php?sel=1>

<sup>2</sup> <http://www.luchemos.org.ar/es/estadisticas>

<sup>3</sup> Según el último relevamiento de la SEDRONAR, el consumo de alcohol estuvo presente en el 22,5% de los accidentes de tránsito, según trascendió en los medios periodísticos. Hace una década, el 22,8% de las víctimas atendidas en las salas de emergencia tras un choque evidenciaban el consumo de alcohol.

Ahora bien, como resultado de las políticas activas que ha llevado adelante el Estado Nacional, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial –creada en 2008 a partir de la ley 26.363-, en coordinación con las distintas jurisdicciones de nuestro país, el número de muertes se ha ido reduciendo sensiblemente, pero en forma sostenida durante los últimos 5 años.

Así también, el Congreso de la Nación, sancionó en 2008 la ley 26.362 que incluyó en el Código Penal el delito de las famosas “picadas”, en un esfuerzo por enfrentar esta irresponsable modalidad que tantas desgracias ha causado. Pero esta reforma resulta aislada e insuficiente.

Creemos entonces que es indispensable abordar esta problemática a través de un conjunto de normas que debe introducirse en el Código Penal como un paquete de delitos viales.

Hoy en nuestro país es muy difícil que una persona purgue una pena de prisión luego de haber cometido un ilícito vial; esto garantiza la impunidad de los conductores imprudentes quienes se saben de antemano, libres de toda consecuencia en caso de matar o lesionar gravemente a una persona.

Actualmente, la figura contemplada por el Código Penal en accidentes de tránsito es la de Homicidio culposo: el artículo 84 establece que la persona que, “por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte”, será reprimida con prisión de 6 meses a 5 años e inhabilitación especial durante 5 a 10 años. Bajo este delito, se entiende que no hubo una intención de matar. El mínimo de la pena se eleva a dos años si hay más de una víctima fatal o si el hecho hubiese sido ocasionado por la conducción imprudente, negligente, inexperta, o antirreglamentaria de un vehículo.

Ahora bien, existe en doctrina y jurisprudencia la figura del dolo eventual. Si bien esta figura no se encuentra tipificada en el Código, se entiende que existió dolo eventual cuando la persona pudo prever o representarse lo que podía ocurrir como consecuencia de una determinada situación (el accidente y sus consecuencias), en cuyo caso, podría corresponderle al autor la figura de homicidio simple contemplada en el artículo 79, que determina que el que matare a otro será reprimido con una pena de entre 8 y 25 años de prisión, en caso de que se compruebe que hubo intención. Sin embargo, los jueces son bastante reacios a aplicar la figura del dolo eventual en caso de accidentes de tránsito. Generalmente, aplican la de homicidio culposo con pena excarcelable. Es decir que muy pocos conductores van presos por este delito.

Los nuevos delitos que venimos a proponer implican la protección de un bien jurídico distinto de la vida o la integridad física. El bien jurídico que se busca proteger es el de la seguridad del tránsito, por eso proponemos incluirlos dentro del Capítulo II del Título VII del Libro II del Código Penal de “Delitos contra la seguridad del tránsito y de los



medios de transporte y de comunicación". Es una forma indirecta de proteger el derecho a la vida y a la seguridad de los ciudadanos.

Aquel que conduce en estado de ebriedad puede no haber causado un daño físico o material a una persona, pero sin duda alguna está perpetrando un atentado a la seguridad del tránsito, pues su presencia en la ruta o en la calle en ese estado hace que todo el sistema vehicular sea menos seguro. Lo mismo sucede con aquel que excede en más de 40 km por hora el límite de velocidad establecido, o el que conduce sin poseer la habilitación correspondiente.

En algunas jurisdicciones provinciales, con sus códigos de tránsito, penan, por ejemplo, el conducir en ebriedad, pero se trata de una contravención, no de un delito penal. El efecto disuasorio es claramente menor, no es lo mismo ser un infractor que ser un delincuente.

En otros países, como Perú, Chile y España, los delitos viales están previstos en la ley con pena efectiva de prisión, por ejemplo:

- Código Penal Peruano

Artículo 274.- Conducción en estado de ebriedad o drogadicción.

El que encontrándose en estado de ebriedad o drogadicción conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, instrumento, herramienta, máquina u otro análogo, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de un año e inhabilitación según el Artículo 36 incisos 6) y 7). Cuando el agente presta servicios de transporte público de pasajeros o de transporte pesado, la pena privativa de libertad será no menor de uno ni mayor de dos años e inhabilitación conforme al Artículo 36 incisos 6) y 7).

- Ley de Transito 18.290 de Chile

Artículo 196 E.- El que infrinja la prohibición establecida en el inciso segundo del artículo 115 A, cuando la conducción, operación o desempeño fueren ejecutados en estado de ebriedad, o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales, ya sea que no se ocasione daño alguno, o que con ello se causen daños materiales o lesiones leves. Se reputarán leves, para estos efectos, todas las lesiones que produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor de siete días.

- Código Penal Español

El Código Penal Español tiene todo un capítulo sobre delitos contra la seguridad vial. En la actualidad están en la cárcel por delitos viales unas 180 personas, la mayoría por sentencias firmes y el resto en prisión preventiva a la espera de juicio.

En España, en la última década han muerto en accidentes unas 55.000 personas y ha habido 1.500.000 heridos. "La Seguridad Vial ha

mejorado mucho en los últimos años, pero sigue siendo un problema de grandes magnitudes ante el que hay que utilizar todo tipo de estrategias en los cuatro grandes elementos que componen la seguridad vial: la vía y entorno, el vehículo, el factor humano y la norma y su control".

Luego de la reforma de su Código Penal en 2008 han muerto 120 personas menos que el año pasado en el mismo período, lo que es muy positivo. Hay que tener en claro que los delitos contra la seguridad vial obedecen a una demanda social: la exigencia de luchar contra la siniestralidad vial, contra la primera causa de muertes en menores de 32 años.

Creemos entonces, en consonancia con el ejemplo que nos brinda la legislación comparada a la que hemos hecho referencia, que sería conveniente introducir los tipos penales viales en el Código Penal, lo cual traería las siguientes ventajas, de transformarlo en delito penal:

- Al tratarse de una modificación al Código Penal que es una ley de fondo, la sanción hecha por el Congreso Nacional y consecuente promulgación, establecerían su inmediata vigencia en todo el territorio nacional sin depender de la ratificación o no de todas o algunas de las provincias.
- Le puede significar al responsable la pérdida de la libertad personal, lo cual sin duda alguna lo va a hacer pensar dos veces a la hora de salir a conducir luego de haber bebido.
- Elevar al rango de delito de una conducta antisocial y antijurídica, expresa de por sí la máxima calificación de repudio social de una conducta que la sociedad no está dispuesta a tolerar a tal punto de enviar a la cárcel a los responsables de la misma.

En cuanto al articulado propuesto, podemos dividirlo en dos partes.

La primera parte busca introducir modificaciones al Capítulo I del Título I del Libro II del Código Penal titulado "Delitos contra las personas". Con estas modificaciones se busca establecer una clara diferencia entre aquella persona que se ve involucrada por una negligente maniobra en un accidente de tránsito a raíz del cual se le provoca una lesión o hasta la muerte a una persona, y aquel conductor que participa de un evento similar al descrito, pero estando voluntariamente bajo la acción de estupefacientes, bebidas alcohólicas y/o sustancias tóxicas que disminuyen la capacidad para conducir. La misma distinción se hace con aquellos que conducen a una velocidad excesiva en abierto desprecio por la vida de los otros.

En una segunda etapa, el articulado propuesto pretende la inclusión en el Capítulo II del Título VII del Libro II del Código Penal "Delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación" de 2 tipos penales distintos y que hasta hoy están previstos como meras infracciones o contravenciones de tránsito según cada jurisdicción, a saber: 1) El delito de conducir a excesiva velocidad, es decir muy por encima de los máximos permitidos; y 2) El delito de conducir bajo la acción de estupefacientes, bebidas

alcohólicas y/o sustancias tóxicas que disminuyen la capacidad para conducir.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto de ley.

Nancy S. González.-

(VI)

## PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Penalización de muerte y lesiones en el tránsito automotor

Artículo 1º- Sustituyese el artículo 5º del Código Penal de la Nación, por el siguiente:

“Artículo 5º - Las penas que este Código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa, inhabilitación y prestación de trabajos para la comunidad.”

Art. 2º- Incorporase como artículo 22 ter del Código Penal de la Nación el siguiente:

“Artículo 22 ter – La prestación de trabajos para la comunidad es aquella que debe realizar el condenado en beneficio de la comunidad, que le permitan conocer, reparar y responsabilizarse por las consecuencias de las conductas por las que fue sancionado. La prestación de trabajos para la comunidad consiste en la obligación de prestar entre seis y diez horas semanales de trabajo no remunerado en los lugares y horarios que establezca el juez.

Se realizará en instituciones, establecimientos u obras de bien público, bajo la supervisión de sus autoridades u otras que se designen. En ningún caso el control del cumplimiento estará a cargo de organismos de seguridad.

Estará a cargo del penado presentar al juez la documentación que acredite su cumplimiento.

El trabajo será acorde a la capacidad o habilidades del condenado, no afectará su dignidad y será en lo posible compatible con su actividad laboral ordinaria.

En los supuestos previstos en el artículo 198 ter de este Código, el servicio comunitario debe ejecutarse preferentemente en instituciones de salud, educación y de seguridad vial, públicas o de bien público sujetas al control estatal, en los servicios relativos al cuidado, atención y asistencia de víctimas de los delitos contra la seguridad vial, educación vial y acción de prevención de infracciones de tránsito.”

Art. 3º- Sustituyese el artículo 62 del Código Penal de la Nación por el siguiente:

"Artículo 62.- La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación:

1º. A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua;

2º. Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años;

3º. A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua;

4º. Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal;

5º. A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa o prestación de trabajos para la comunidad."

Art 4º- Sustituyese el artículo 65 del Código Penal de la Nación por el siguiente:

"Artículo 65.- Las penas se prescriben en los términos siguientes:

1º. La de reclusión perpetua, a los veinte años;

2º. La de prisión perpetua, a los veinte años;

3º. La de reclusión o prisión temporal, en un tiempo igual al de la condena;

4º. La de multa y prestación de trabajos para la comunidad, a los dos años."

Art. 5º – Agréguese al artículo 77 del Código Penal de la Nación el siguiente párrafo:

"El término "automotor" comprende indistintamente al automóvil, camión, camioneta, ciclomotor, carretón, maquinaria especial, motocicleta, ómnibus y vehículo automotor, según las definiciones de la ley nacional de tránsito, y a toda otra máquina que tenga motor y tracción propia, incluyendo triciclos y cuatriciclos, y a sus acoplados, semiacoplados y remolques."

Art. 6º- Sustituyese el artículo 84 del Código Penal por el siguiente:

"Artículo 84. - Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte.

El mínimo de la pena se elevará a dos años si fueren más de una las víctimas fatales."

Art. 7°- Incorporase como artículo 84 bis al Código Penal de la Nación el siguiente:

"Artículo 84 bis.- Será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por la conducción imprudente, negligente, inexperta, o antirreglamentaria de un automotor, causare a otro la muerte.

La pena será de prisión de tres a ocho años, si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior, y el conductor se diere a la fuga, o no intentase socorrer a la víctima siempre y cuando no incurriere en la conducta prevista en el artículo 106, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a quinientos (500) miligramos por litro de sangre en el caso de los conductores de transporte público o un gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de treinta (30) kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular o cuando se dieran las circunstancias previstas en el artículo 193 bis, o por culpa temeraria."

Art.8- Sustituyese el artículo 94 del Código Penal de la Nación por el siguiente:

"Artículo 94. - Se impondrá prisión de un mes a tres años o multa de mil a quince mil pesos e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud.

Si las lesiones fueran de las descriptas en los artículos 90 o 91 y fueren más de una las víctimas lesionadas, el mínimo de la pena prevista en el primer párrafo, será de seis meses o multa de tres mil pesos e inhabilitación especial por dieciocho meses."

Art.9.- Incorpórese como artículo 94 bis del Código Penal de la Nación el siguiente:

"Artículo 94 bis.- Será reprimido con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por dos a cuatro años, si las lesiones de los artículos 90 o 91 fueran ocasionadas por la conducción imprudente, negligente, inexperta, o antirreglamentaria de un automotor.

La pena será de dos a cuatro años de prisión si se verificase alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diese a la fuga, o no intentare socorrer a la víctima siempre y cuando no incurriera en la conducta prevista en el artículo 106, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a quinientos (500) miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o un gramo por litro de sangre en

los demás casos, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de treinta (30) kilómetros por encima de la velocidad máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular, o cuando se dieren las circunstancias previstas en el artículo 193 bis, o con culpa temeraria.”

Art. 10°.- Incorpórese como artículo 193ter del Código Penal de la Nación el siguiente:

“ARTÍCULO 193 ter. – Se impondrá multa de cuatro mil (\$4.000) a quince mil pesos (\$15.000) y prestación de trabajos para la comunidad de uno (1) a tres (3) meses e inhabilitación especial de uno (1) a cuatro (4) años:

1. Al que conduzca un automotor a velocidad superior a treinta (30) kilómetros de la máxima permitida
2. Al que conduzca un automotor con una alcoholemia superior a un (1) gramo por litro de sangre.
3. Al que conduzca un automotor en estado de intoxicación por el uso de estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales que le impidan conservar en todo momento el dominio efectivo del automotor.
4. Al conduzca un automotor sin haber obtenido su licencia de conducir o estando inhabilitado para conducir.”

Art. 11- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan M. Irrazábal.-

## FUNDAMENTOS

Señora presidente:

El domingo 21 de agosto de 2016 a la madrugada, en la intersección de las avenidas Quaranta y Santa Catalina de la ciudad de Posadas, una adolescente de 15 años conduciendo un auto que le regalaron para su cumpleaños chocó contra un motociclista y le causó la muerte. Este acontecimiento ha reabierto la polémica sobre los accidentes de tránsito y el interés de encontrar una respuesta legislativa para este flagelo.

Tal es el propósito de este proyecto de ley, inspirado en iniciativas que han pasado a revisión en ambas cámaras pero que actualmente han perdido estado parlamentario. Al respecto, estimamos que este es el momento para elevar determinadas conductas que hoy solo son consideradas contravenciones a delitos, como manera de combatir la cantidad de víctimas. Sin duda que elevar al rango de delito una

conducta antisocial y antijurídica, expresa de por sí la máxima calificación de repudio social de una conducta que la sociedad no está dispuesta a tolerar a tal punto de enviar a la cárcel a los responsables de la misma. Desde ya que no es la misma valoración para la sociedad, y aumenta por ende mucho más el interés por reprimir el accionar de un delincuente que el de un mero infractor. En toda sociedad civilizada, en general, infractor puede ser cualquiera pero delincuente no, sino tan sólo una minoría transgresora que pretende ir a contramano de las normas fundamentales de convivencia que en todos los países civilizados se respetan y se condena severamente su violación. Desde el punto de vista de la prevención es mucho más disuasivo para cualquiera y acá viene tal vez el máximo beneficio de la constitución en delito, el saber que cualquiera de dichas conductas es un delito que si lo comete le puede significar la pérdida de la libertad personal. El afrontar un proceso penal con importantes gastos ya que seguramente deberá pagar un buen abogado defensor, enfrentar el escarnio público que significa el haberse transformado en un delincuente y la posibilidad de tener que conocer una cárcel desde adentro así como los antecedentes penales que ganará, son un disuasivo mucho más fuerte para el ciudadano común que el cometer una infracción o contravención.

Los siniestros de tránsito son la principal causa de muerte entre los seres humanos entre los 5 y los 29 años de edad a nivel mundial. América Latina es uno de los continentes más golpeados por este flagelo. En los foros internacionales se señala la importancia de generar políticas públicas de alto impacto a fin de detener la incidencia de muertos y heridos en el tránsito y expertos mundiales proponen que los siniestros viales sean considerados como un problema de salud pública. En la República Argentina se trata de un problema de larga data que no ha experimentado mejoras en los últimos tiempos. Según la asociación civil "Luchemos por la Vida" en el país hubo más de 7.400 muertos en 2015 como producto de eventos ligados al tránsito vehicular, con en un promedio diario de 21 muertos y un promedio mensual de 622 muertos.

Algunos países muy avanzados en seguridad vial han resuelto que ciertos comportamientos que atentan gravemente contra la seguridad vial y la vida de las personas en la vía pública, aunque no hayan causado concretamente accidentes de tránsito con muertos o heridos, constituyen delitos que integran sus respectivos códigos penales y son reprimidos con penas de prisión. Tal vez el caso más cercano a nuestra cultura sea el del Reino de España, a cuya Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se ha incorporado hace unos años un capítulo denominado "delitos contra la seguridad vial", y que ha sido perfeccionado en una última reforma, vigente desde diciembre de 2007. Esta reforma se tradujo por un lado en nuevas incriminaciones, como el exceso de velocidad punible (artículo 379. 1), la conducción tras la pérdida de vigencia del permiso por pérdida de total de puntos (artículo 384, primer párrafo) o sin haber obtenido nunca permiso de conducir (artículo 384, segundo párrafo). También supuso la ampliación o remodelación de los tipos penales existentes: la tipificación de la tasa de alcoholemia objetivada del artículo 379.2; la negativa a someterse a las pruebas legalmente

establecidas para detectar el grado de alcoholemia o de impregnación tóxica perdió su calificativo de delito de desobediencia y pasó a ser autónomamente castigada (artículo 383), se incorporó un supuesto específico conducción temeraria en el art. 380.2 y la nueva expresión "manifiesto desprecio" en el artículo 381, y se suprimió del artículo 385 la expresión "alterando la seguridad del tráfico", llevándose a cabo una ampliación de las conductas típicas. Asimismo, las penas y consecuencias se incrementaron notablemente, en especial, en lo concerniente a la privación del permiso de conducir, y a ello se añadió la no menos severa posibilidad de considerar instrumento del delito al vehículo de motor o ciclomotor, en orden a disponer su comiso (artículo 385 bis).

En el estudio de los proyectos que fueron presentados ante esta H. Cámara y que obtuvieron media sanción (S-3654/10) los expertos que concurrieron a las distintas reuniones de comisión nos hicieron reflexionar sobre lo siguiente: ¿son "accidentes"? Cuando una persona se coloca en situación de provocar un accidente y este sucede –el siniestro ocurre–, no podemos decir que es un accidente: aquello que es evitable no es un accidente. Y si bien el Derecho Penal no es condición suficiente para cambiar la realidad, porque hay que profundizar mucho en lo que es educación vial, creemos que sí es una intervención necesaria cuando, deliberadamente o por temeridad, una persona se comporta con desprecio por la vida, por la integridad física o por los bienes de terceros. Entonces, ¿qué buscamos con este proyecto? En primer lugar, reafirmar ante la sociedad la plena vigencia de las normas esenciales que protegen estos bienes jurídicos que han sido despreciados por el conductor imprudente. Porque cuanto mayor es el deber de obrar con prudencia, mayor tiene que resultar la obligación por las consecuencias causadas a raíz de la imprudencia. De este modo, proponemos legislativamente penas alternativas a las de prisión que nos van a permitir no dejar sin sanción conductas graves y evitar efectos socialmente nocivos asociados a la pena privativa de libertad. Creemos muy conveniente para esto la pena de prestación de trabajos para la comunidad, también receptada en el proyecto de reforma integral de Código Penal. Estas penas se utilizarán para los casos en los que se decidió elevar a la categoría de delitos diferentes infracciones que son las que más directamente se asocian a la posibilidad de que resulte un resultado dañino en caso de que se produzca el siniestro. Así también se propone aumentar las penas del homicidio culposo y las lesiones culposas cuando sean causadas con un automotor y crear una agravante cuando sucedan en determinadas circunstancias objetivas que claramente aumentan la posibilidad del accidente. También creemos muy importante tratarlos en un artículo diferente al homicidio culposo clásico, para poder visualizarlo claramente.

Podemos tomar como ejemplo el país vecino Chile que en 2014 promulgó la ley Emilia que endurece fuertemente las penas en caso de alcohol al volante y según los medios chilenos después de un año de vigencia, desde su publicación, el 16 de septiembre de 2014, los decesos por esta causa han disminuido cerca de un 20%. Así, de acuerdo a datos entregados por Carabineros a "AhoraNoticias.cl", desde la fecha en que comenzó a regir la legislación y el 31 de julio de



2015 se registraron 4.086 accidentes de tránsito, disminuyendo en 440 los siniestros en relación al período anterior. Asimismo, se produjeron 113 muertes, 28 menos que el año anterior. Datos similares son los que manejan desde la Fundación Emilia que, con cifras que incluyen el mes de agosto, confirman esta caída cercana el 20%: "La tendencia no baja. Más del 90% de la población está a favor de esta ley y la gran mayoría ha entendido que no hay que mezclar el alcohol y el volante", explicó Benjamín Silva, vicepresidente del organismo y padre de Emilia, pequeña que falleció en enero de 2013 luego de un choque producido por un conductor ebrio. Afirmó que "aunque es doloroso, las cifras nos avalan. Todos los indicadores han bajado (...) No tenemos problemas con el consumo, pero sí que sea responsables. Los cambios culturales si son posibles y con la presión de los medios, de las redes sociales y de la ciudadanía podemos a controlar a quienes contra toda racionalidad conducen con alcohol y drogas"

Es por todo lo expuesto que pido a mis pares apoyen el tratamiento de este proyecto de ley.

Juan M. Irrazábal.-

(VII)

## PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1°.- Sustitúyase el artículo 84 del Código Penal, por el siguiente

“Artículo 84:

1. Será reprimido con prisión de UNO (1) a CINCO (5) años e inhabilitación especial de CINCO (5) a DIEZ (10) años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, o inobservancia de los reglamentos o los deberes a su cargo, causare a otro la muerte.

2. Si la infracción al deber de cuidado fuere temeraria, el máximo de la pena de prisión será de OCHO (8) años.”

Art. 2°.- Sustitúyase el artículo 94 del Código Penal, por el siguiente:

1. Se impondrá multa de DIEZ MIL pesos (\$10.000) a CINCUENTA MIL pesos (\$50.000) e inhabilitación especial de SEIS (6) meses a DOS (2) años, al que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro una lesión de las previstas en el artículo 89.

2. Si la lesión fuere de las señaladas en los artículos 90 y 91, la pena será de prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años, multa de hasta

CIEN MIL pesos (\$100.000) a DOSCIENTOS MIL pesos (\$200.000) e inhabilitación especial de UNO (1) a TRES (3) años.

3. Los máximos se elevarán a CINCO (5) años de prisión, multa de TRESCIENTOS MIL pesos (\$300.000) a QUINIENTOS MIL pesos (\$500.000) e inhabilitación especial de DOS (2) a OCHO (8) años en los supuestos del inciso 2º del artículo 84.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Pedro G. Guastavino. -

## FUNDAMENTOS

Señora presidenta:

La conducción imprudente de vehículos automotores se ha transformado en la principal causa de muertes violentas y heridos de los últimos veinte años. La propia Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco ha afirmado que "Hay más muertes por accidentes de tránsito, hay muchas más muertes y heridos, que por otro tipo de inseguridad delictiva".

Resulta a todas luces evidente que tanto las campañas de concientización y prevención como las herramientas normativas y su utilización por parte de los operadores judiciales han sido inadecuadas e insuficientes.

Hasta fines del año 1999, el Código Penal reprochaba con una escala de seis (6) meses a tres (3) años de prisión el homicidio culposo previsto en el artículo 84 del Código Penal y, con una escala de un (1) mes a dos (2) años de prisión, las lesiones culposas del artículo 94.

El 29 de septiembre de ese año, el Honorable Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 25.189 que introdujo el texto actual de los artículos 84 y 94 del Código Penal. Se aumentó la pena para el homicidio culposo a cinco (5) años de prisión en su máximo y en el mínimo a dos (2) años cuando el delito fuere ocasionado por la conducción imprudente, negligente, inexperta, o antirreglamentaria de un vehículo automotor o hubiere más de una (1) víctima. A su vez, con el mismo esquema, las lesiones culposas llevaron su máximo a tres (3) y elevaron su mínimo a seis (6) meses para los casos de lesiones graves o gravísimas en el supuesto del accidente de tránsito o con resultado de más de una (1) víctima.

Esta modificación al Código Penal no estuvo exenta de polémica. Poco tiempo antes, la sociedad argentina se había visto sacudida por un terrible accidente de tránsito que le costó la vida a una joven mujer y su pequeña hija. El 30 de agosto de 1999 Sebastián Cabello impactó su auto a gran velocidad contra el que viajaban las víctimas, provocándoles la muerte.

En ese momento, el debate giró en torno a si la conducta en la que había incurrido Cabello encuadraba en la culpa con representación o

el dolo eventual. Esta discusión tenía el sentido de definir cuál podría ser la pena en expectativa ¿la pena en expectativa tendría un máximo de tres (3) o de veinticinco (25) años de prisión? lo cual no era una discusión menor.

Si bien el Tribunal Oral en lo Criminal N° 30 condenó a Cabello a doce (12) años de prisión, entendiendo que la conducta era propia del dolo eventual, la Cámara de Casación Penal redujo la pena a tres (3) años, el máximo previsto para el homicidio culposo, sentencia que luego fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esta situación dejó en evidencia una problemática que hoy en día sigue muy vigente en la justicia, y es cuál debería ser la pena y el criterio que debe evaluar el juez al momento de determinados hechos.

El antecedente reavivó las controversias doctrinarias entre el dolo eventual y la culpa con representación, por un lado, y la discusión social sobre la pena que merece quien mata o lesiona en un accidente de tránsito, por otro.

Posteriormente, la atención se posó en las conductas peligrosas de los conductores de vehículos que son previas a la producción del accidente de tránsito.

En el año 2008 se sancionó la Ley 26.362 que creó el tipo penal doloso de peligro del artículo 193 bis, comúnmente conocido como la penalización de las "picadas". Se transformó, entonces, una contravención en delito, buscando nuevamente la respuesta a este flagelo en la incorporación de figuras extrañas a la sistemática del Código Penal.

Sin embargo, las modificaciones reseñadas no han tenido los resultados esperados. Día a día, ante un nuevo accidente de tránsito que por su espectacularidad o lamentables consecuencias se ve reflejado en los medios de comunicación y en las redes sociales, renace el debate acerca del reproche penal que correspondería aplicarse.

El presente proyecto propone un profundo cambio de carácter legal y político, basado en el Anteproyecto de Código Penal elaborado por la Comisión reformadora creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 678 del año 2012. A la culpa simple se agrega la denominada culpa grave o temeraria, tal como estaba previsto en el proyecto de Tejedor y en el Código de 1886.

Allí, se definía a la culpa grave siguiendo al Código de Baviera, el cual en su artículo 16 reza: "La culpa es grave: 1. Cuando el autor del daño ha podido prever el peligro de su acción y sin embargo se abstiene de ella por pasión, irreflexión o ligereza; 2. Cuando el hecho encierra en sí mismo tal grado de peligro, que basta la menor atención para prever que el hecho podía producir el resultado ilícito; 3. Cuando por razón de sus conocimientos personales o de las circunstancias en que se encuentre, el delincuente fuese capaz de prever el peligro de su acción o de sus consecuencias; 4. Cuando el hecho ejecutado con imprudencia era ya ilícito o prohibido por otros motivos; 5. Cuando por

razón de su estado, profesión, empleo compromiso u otras circunstancias análogas, el autor estuviese obligado a mayor diligencia y atención; 6. Cuando sin título legal se ejerce ciencia, arte o profesión, no estando ese ejercicio justificado por la urgencia y necesidad del caso”.

Citando a Zaffaroni en la exposición de motivos del Anteproyecto de Código Penal; “Es posible que se observe que el concepto de culpa temeraria provocará una seria discusión doctrinaria y que ésta demorará en aclararse, creando situaciones de eventual arbitrariedad.

En principio, cualquier concepto nuevo requiere una discusión doctrinaria y jurisprudencial; si ese fuese un suficiente motivo de rechazo, nunca se podrían incorporar conceptos nuevos al derecho penal, que quedaría limitado al arsenal doctrinario disponible. En segundo término, la posible arbitrariedad se movería entre la imposición de una pena máxima de cinco años y otra de ocho. En la actualidad —con el escurridizo dolo eventual— la arbitrariedad se mueve entre una pena máxima de cinco años y otra de veinticinco.”

Hoy la doctrina define a la culpa temeraria como aquella donde un observador tercero percibe la creación de un peligro prohibido en forma tan clara, que la exterioridad del comportamiento le muestra un plan dirigido a la producción del resultado, que por supuesto, no debe conformarse con su existencia subjetiva. Es decir, la culpa temeraria se da cuando la violación al deber de cuidado es notoria, más allá del resultado; aunque el agente se pueda representar el resultado de su acto, sigue adelante confiando en que no ha de producirse. Esa infracción al deber de cuidado implica una grave desconsideración por los bienes en juego y es por ello que merece un reproche penal más elevado, pero siempre dentro del ámbito de la culpa y no del dolo.

Es en conductas como las que actualmente prevén los artículos 84, 94 y 193 bis del Código Penal -en las cuales el agente no conoce ni quiere la producción de un resultado, sino que su infracción es la violación a un deber de cuidado- donde encuentra su ámbito de aplicación la culpa temeraria. No hay dolo, pero ello no es óbice para que se pueda graduar la pena aplicando un reproche más amplio, según la gravedad de la norma infringida.

Se propone, de esta manera, reformar los artículos 84 y 94 del Código Penal para:

1. clausurar definitivamente la disputa entre la culpa con representación y el dolo eventual;
2. buscar una proporcionalidad racional en el reproche penal;
3. establecer que la cuantía de la gravedad de la lesión al deber de cuidado debe referirse solamente a dos estándares: la jerarquía del deber que le concernía al autor y el grado de violación en que incurrió. Para ello, se ha tenido como referencia la redacción y fundamentación propuesta para los artículos 83 y 95 del citado Anteproyecto de Código Penal, introduciendo la culpa temeraria como forma de graduar la pena para los casos más graves. Solamente para estos casos, se lleva

el máximo de la pena a ocho (8) años de prisión para el homicidio y a cinco (5) años de prisión para las lesiones por culpa temeraria.

Por otro lado, la propuesta también importa para ambos delitos el aumento del mínimo de la pena -incluso para los casos de culpa leve- y de los montos de las multas.

Pero lo más importante es que la presente propuesta de reforma permite que los casos de homicidios culposos más graves alcancen el mínimo de la pena que se establece para el homicidio doloso, evitando tanto penas benignas para cuando exista una culpa grave, como excesivas cuando se quiera embutir el dolo en la conducta.

La norma propiciada, para individualizar la pena, hace mérito de la naturaleza y entidad de la violación a la norma preventiva de cuidado, como debe ser siempre en los tipos culposos, por un lado; y por otro, estima la jerarquía del deber de cuidado que le incumbía al autor. Así, se evita caer en la casuística de los tipos penales vigentes, que agravan el reproche penal por la conducción imprudente, negligente, inexperta o antirreglamentaria de un vehículo automotor, o bien, por el número de víctimas. Como se refiriera anteriormente, estas herramientas que detallan al máximo la conducta típica y que nacieron en su momento como resultado de un loable esfuerzo legislativo por captar las demandas sociales, han resultado ineficaces.

Su reemplazo en la sistemática del Código Penal por la figura de la culpa temeraria no implica de ninguna manera un desconocimiento o relativización de la problemática de los accidentes de tránsito. Por el contrario, busca dotar a los jueces de la mejor herramienta para sancionar a quienes incurrir en este tipo de conductas con la severidad que cada caso exige.

Finalmente, no menor importancia tiene la reformulación del artículo 94 del Código Penal, inspirado en el numeral 95 del Anteproyecto del Código del año 2012.

Aquí, se ha considerado preferible distinguir según la gravedad de las lesiones, lo que, por otra parte, se adecua mucho más a la regla general de individualización, dado que se toma como base la afectación al bien jurídico.

El presente proyecto es una propuesta superadora para terminar con muchas situaciones injustas de las que a diario tomamos cuenta, en las que se aplican penas insignificantes frente a la pérdida de una vida humana por conductas negligentes o temerarias en general. La introducción de la culpa temeraria aparece como la herramienta más adecuada, ya no solamente para el juicio y castigo de las muertes y lesiones que se producen en accidentes de tránsito, sino también para aquellas que son resultado de malas praxis médicas y diversas tareas riesgosas.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.

Pedro G. Guastavino. -

\* VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO